

**JUEZ SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI**

E. S. D.

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA.
REFERENCIA: REPARACIÓN DIRECTA.
RADICACIÓN: 76001-33-33-007 2021-00053-00
ACCIONANTE: MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN Y OTROS
ACCIONADO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.**

LINA MARÍA ARBOLEDA GÓMEZ, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con cedula de ciudadanía **1.130.592.302**, Abogada titulada y en ejercicio de la profesión, portadora de la Tarjeta Profesional número **191823** del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderada del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme al poder adjunto al proceso, de manera atenta descorro el traslado para contestar la demanda que en ejercicio del medio de control de la referencia se interpuso contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, en los siguientes términos:

FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS:

El Distrito Especial de Santiago de Cali no es responsable de los perjuicios reclamados por la parte demandante **MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN Y OTROS**, como consecuencia del aparente accidente de tránsito, sufrido el día 6 de abril de 2019, cuando la señora **MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN**, dice se desplazaba en motocicleta por la Calle 70 con carrera 3, de esta ciudad aproximadamente a las 13:05 PM, fue impulsada por un hueco sobre la vía según hipótesis o causa probable del accidente de tránsito atendido mediante informe policial de accidente de tránsito No. A000889169 elaborado por el agente de tránsito el señor **MIGUEL ÁNGEL SANDOVAL**, que en el momento del accidente se identificaba con el N.º 264 de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali.

Como se puede observar los hechos de la demanda son confusos en su descripción del lugar del suceso y la demanda carece de material probatorio que confirme y de veracidad sobre los hechos planteados, no existe prueba que determine y de fe de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del supuesto accidente de tránsito, siendo insuficiente para ello el informe rendido por la autoridad de tránsito competente. Se logrará evidenciar en el

transcurso del proceso que no existen pruebas que confirme y demuestren que las lesiones presentadas por la señora MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN, ocurrieron como consecuencia de la responsabilidad antijurídica del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Por tal razón, me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, porque como quedará demostrado en el transcurrir de esta contestación de la demanda, no existe relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre el hecho y el daño que sea imputable al Distrito Especial de Santiago de Cali.

Conforme a lo dicho, las pretensiones que enmarca en su demanda el actor, son infundadas, no se le puede imponer esa responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali, teniendo como base situaciones que no gozan de un soporte probatorio. Reclamaciones en torno a perjuicios materiales e inmateriales no son del resorte de la Administración Municipal, no existe certeza respecto a los hechos que dieron origen a las lesiones de la señora MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN, mucho menos las hay respecto a la participación o responsabilidad del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, en el hecho generador de las mismas.

Las pretensiones solicitadas por la parte demandante además de ser infundadas y de no poder imponérselas al Distrito Especial de Santiago de Cali, se exceden y no gozan de soportes que les den viabilidad, por ejemplo las que cita a título de perjuicios morales, adolecen de los presupuestos dados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en este tema, donde se determina el monto indemnizatorio en salarios mínimos asignando un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que estas se hallen respecto del lesionado, conforme a la gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles, se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso. Llevado al caso que nos ocupa, la parte demandante fija y tasa los perjuicios sin seguir o hacer esta diferenciación, asigna a cada uno el mismo monto sin tener en cuenta el grado o relación de parentesco con el lesionado. También se asigna o se tasa el porcentaje de estos valores sin tener en cuenta el grado de complejidad o gravedad de las lesiones, al respecto como se puede colegir en el proceso, no se cuenta con esa valoración por parte de la Junta de Calificación de Invalidez Regional del Valle del Cauca.

No obstante los parámetros fijados por la Alta Corporación, su viabilidad depende en gran medida de las pruebas con las cuales cuente el proceso respecto de las lesiones y las circunstancias en que se produjeron y, como se observará, el recaudo probatorio no da certeza ni siquiera del accidente de tránsito.

Volviendo a lo plasmado en la demanda, la señora MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN, tasa en sus pretensiones perjuicios morales en la demanda, en calidad de afectada directa, de igual manera solicita perjuicios morales para quienes integran según

su escrito su círculo afectivo, advirtiendo que la tasación que realiza desborda por completo los valores y parámetros establecidos por la ley en estos casos.

FRENTE A LOS HECHOS U OMISIONES DE LA DEMANDA:

AL HECHO UNO: No me consta. No hay prueba que corrobore o demuestre de manera clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente y por ende las lesiones sean consecuencia del mismo.

AL HECHO DOS: No me consta. Son aseveraciones y situaciones que no son del resorte de mi mandante, quien no es responsable de las lesiones o inconvenientes médicos presentados por la señora MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN.

AL HECHO TERCERO: No me consta, son situaciones por acreditar, respecto a los datos consignados de la consulta, harían parte del relato entregado por la paciente.

AL HECHO CUARTO: No me consta, me atengo a lo que acredite con la documentación allegada y corroborada por el Despacho.

AL HECHO QUINTO: No me consta, me atengo a lo que acredite con la documentación allegada y corroborada por el Despacho.

AL HECHO SEXTO: No me consta, me atengo a lo que acredite con la documentación allegada y corroborada por el Despacho.

AL HECHO SÉPTIMO: No me consta, me atengo a lo que acredite con la documentación allegada y corroborada por el Despacho.

AL HECHO OCTAVO: No me consta, se hace referencia a una situación por determinar, se habla de unas posibles secuelas o pérdida de capacidad laboral, circunstancias que se definen por la Junta de Calificación Regional o Nacional de Invalidez.

AL HECHO NOVENO: No es un hecho como tal, hace parte del acápite de pruebas, entendiendo además que hace parte de una manifestación que en su momento el Despacho tendrá que valorar

AL HECHO DECIMO: No me consta, son situaciones por acreditar por parte del demandante ante el Despacho en el momento procesal oportuno.

AL HECHO ONCE: No me consta, son situaciones por acreditar por parte del demandante ante el Despacho en el momento procesal oportuno.

AL HECHO DOCE: No es un hecho como tal, hace parte del acápite de pruebas, entendiendo además que hace parte de una manifestación que en su momento el Despacho tendrá que valorar.

AL HECHO TRECE: No es un hecho como tal, hace parte del acápite de pruebas, entendiendo además que hace parte de una manifestación que en su momento el Despacho tendrá que valorar.

AL HECHO CATORCE: No es un hecho como tal, hace parte del acápite de pruebas, entendiendo además que hace parte de una manifestación que en su momento el Despacho tendrá que valorar.

AL HECHO QUINCE: No me consta, son situaciones por acreditar por parte del demandante ante el Despacho en el momento procesal oportuno.

AL HECHO DIECISÉIS: No es un hecho, es una aseveración subjetiva de la parte demandante.

AL HECHO DIECISIETE: No me constan estas actividades ni la relación laboral que afirma la accionante sostenía con esa empresa; de igual forma no me constan sus ingresos por dichas actividades, son situaciones ajenas a mi defendida y que no son de su resorte, aún así son presunciones y pretensiones que no cuentan con el respectivo soporte que las corrobore.

AL HECHO DIECIOCHO: No me consta, son situaciones por acreditar por parte del demandante ante el Despacho en el momento procesal oportuno.

AL HECHO DIECINUEVE: Es cierto en lo que respecta al fallecimiento del señor Abel Arturo Restrepo (QEPD), pero no me constan las demás aseveraciones que hace al apoderado de la parte actora.

AL HECHO VEINTE: No es un hecho como tal, hace parte del acápite de pruebas, entendiendo además que hace parte de una manifestación que en su momento el Despacho tendrá que valorar.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA DEFENSA

La apoderada de los actores de la presente demanda, plantea argumentos encaminados a endilgarle responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali, respecto del supuesto accidente de tránsito ocurrido el día 6 de abril de 2019, cuando dice que la señora MARY

ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN se desplazaba en motocicleta por la Calle 70 con Carrera 3 sentido sur-norte de Cali, lugar en el que indica había un hueco en la vía sin señalización, el cual produjo el volcamiento de su motocicleta, ocasionándole lesiones en su cuerpo.

Las acotaciones realizadas por el personal médico, dan cuenta de la asistencia recibida por la señora MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN, estas expresiones pueden dar fe de las lesiones presentadas en el cuerpo de la demandante sin que se pueda colegir o afirmar que estas sean producto de un accidente de tránsito, todo se desprende de lo aseverado por la víctima sin que el informe rendido por la autoridad competente sea suficiente para constatar de manera cierta la ocurrencia del hecho, dando claridad sobre tiempo, modo y lugar del mismo, que evaluara los motivos del supuesto accidente por lo cual las lesiones presentadas por la señora MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN, no se pueden atribuir como consecuencia de un accidente de tránsito y mucho menos que los hechos sobrevengan de una responsabilidad atribuible al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

No existe certeza o evidencia que dé cuenta del lugar exacto donde ocurrió el accidente mencionado por el demandante, la parte actora se limita a señalar una responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali y que como consecuencia de ella se le condene a pagar unas sumas de dinero por perjuicios materiales e inmateriales, sin que se prueben las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon al mismo. En este orden de ideas, carece de sustento lo afirmado por la apoderada de la parte demandante en cuanto señala que el hecho implica una falla del servicio por parte de la administración, lo cual le corresponde probar.

Cabe resaltar que se gira bajo dos ámbitos, por un lado, la ausencia de material probatorio que determine y dé certeza respecto a la imputación de responsabilidad en cabeza del Distrito. Por otro lado, el registro que hace el Agente de Tránsito, además de ser insuficiente para acreditar la responsabilidad, lo que se percibe de él es que da cuenta de circunstancias que en su conjunto, evidencian una falta de cuidado e impericia por parte de la demandante, así como el incumplimiento de las normas de tránsito como se ampliará más adelante en este escrito.

La única prueba que exhibe y sobre la cual descansan las pretensiones de la parte demandante es el informe de tránsito, respecto del cual, como ya se mencionó, se presentan vacíos que con la argumentación que planteamos en defensa del Distrito, terminarán por desgastar y tumbar la hipótesis planteada por el agente de tránsito al señalar, como causa del accidente, el hueco sobre la vía.

Si se analiza y desglosa el informe de tránsito, se logra observar que el mismo surge de lo que en su momento le manifestó la víctima la señora MARY ANGÉLICA RESTREPO, el informe termina siendo un reflejo de lo que ella le comunica e indica que ocurrió pero que, si se detallan ciertas circunstancias pierde validez e idoneidad.

Para el análisis del caso concreto deben tenerse en cuenta de ciertos factores como:

1. Velocidad en que iba la motocicleta (en ese tramo existe un aviso de reducción de velocidad- Detención electrónica)
2. La motocicleta queda en la mitad del ingreso o entrada de vehículos a la autopista, este ingreso o intersección prevé una reducción de velocidad y más atención toda vez que se encuentra con otros automotores que recién se incorporan a la vía.
3. Carril sobre el que se desplazaba la motocicleta (carril izquierdo), contraviniendo lo dispuesto por el Código Nacional de Tránsito.
4. Lugar en el que queda la motocicleta, existe una distancia entre ese sitio y el hueco de 15,45 metros, sumado a que el hueco dista del separador 9,80 metros.
5. El accidente ocurre a la 13:05 y el informe se toma a las 13:55, es decir se inicia o basa en lo que narra la víctima.
6. Es una vía recta, plana y a plena luz del día.

Al detallar lo mencionado, paso a recalcar que no se encuentra acreditado que las causas del accidente se deban a una acción u omisión de la entidad pública, y la única tesis que se avizora como posible causa del accidente es la de una decisiva intervención por parte de la misma víctima en su actuar, ya que se despliegan una serie de imprudencias, la falta de cuidado e incumplimiento a las normas de tránsito que, de haberse acatado, habrían evitado el accidente.

Según lo consignado en el mismo INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO (IPAT), se tiene que la actuación del agente de tránsito, en su condición de autoridad de tránsito investido de funciones de policía judicial con arreglo al Código de Procedimiento Penal (artículo 202³) para la atención de accidentes donde existan lesionados o muertos, no fue ajustado a la normatividad (*Código de Procedimiento Penal, Código Nacional de Tránsito, Manual de diligenciamiento del IPAT adoptado mediante Resolución No. 0011268 de 2012 por el Ministerio de Transporte*), omitiendo la práctica de los protocolos obligatorios establecidos para la policía judicial (*libro 11 del mismo código*) en materia de recaudo probatorio de cara a las diferentes acciones legales que el evento genera, lo que incluye la compilación y la rigurosa cadena de custodia de las pruebas que se hubieran podido obtener en ejercicio de sus funciones judiciales, la práctica de la prueba de alcoholemia, el estado en que se habría encontrado la motocicleta lo que habría permitido establecer la forma de los daños del vehículo; luego entonces, forzoso es concluir que de la actuación oficial del agente de tránsito no se puede inferir la más mínima claridad sobre la forma como ocurrió el hecho que produjo el daño, es decir, que no hay prueba oficial

que demuestre que la motocicleta conducida por la demandante se volcó según el informe por la presencia de huecos en la vía, y que producto de esa caída hubiera recibido lesiones en su corporalidad; el motivo por el cual perdió el control de la motocicleta, fue por el exceso de velocidad con que se desplazaba por una vía residencial, así el agente de tránsito haya formulado una hipótesis del mismo, lo cual no es más que eso, una hipótesis.

Al respecto, permítame, Honorable Juez, traer a colación el pronunciamiento de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, Sentencia del ocho (8) de mayo de dos mil veinte (2020), Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00352-01(55980), Actor: DIANA CAROLINA DUQUE ACOSTA Y OTROS, Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- Referencia: REPARACIÓN DIRECTA:

“Temas: DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE VEHÍCULOS, NAVES O AERONAVES / motocicleta se volcó por la supuesta presencia de un hueco en la vía / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y DE SEÑALIZACIÓN – no se acreditaron las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos objeto de la demanda / IMPUTACIÓN – no se demostró que el daño alegado en la demanda fuese atribuible al Estado.

La Sala, después de analizar los medios de convicción que, en debida forma, se recaudaron en el proceso, concluye que, en el caso objeto de estudio, si bien se probó que Diana Carolina Duque Acosta sufrió unas lesiones consistentes en un trauma craneoencefálico leve y un esguince en el tobillo izquierdo, el 31 de enero de 2009, como consecuencia del volcamiento del vehículo en que se transportaba, lo cierto es que se desconoce por completo cuál fue la causa del accidente de tránsito en mención, por las siguientes razones: i) el informe suscrito por el agente de tránsito Luis Garay no proporciona claridad en relación con la escena del accidente y ii) la Subsección no cuenta con otro elemento probatorio que le permita establecer las condiciones en las que resultó lesionada la víctima.

En efecto, el agente de tránsito Luis Garay suscribió el “informe policial de accidente de tránsito” y en el diligenciamiento del formulario informó que el 31 de enero de 2009, a las 11:20 horas, en la calle 13 con carreras 71 y 72, en el municipio de Santiago de Cali, se produjo el volcamiento de la motocicleta particular de placas IGK-82B, conducida por Diana Carolina Duque Acosta.

En relación con el lugar del accidente, especificó que se trataba de una vía recta, de doble sentido, con dos calzadas y con tres carriles, de asfalto y con buena iluminación.

Además, aunque dejó en blanco la casilla denominada “causas probables”, destinada a indicar las circunstancias o actuaciones que, posiblemente, dieron origen al accidente, en la casilla correspondiente a “observaciones” consignó lo siguiente: “hipótesis -> huecos en la vía”.

*Consultado el plano o croquis del accidente, la Sala encuentra que el agente de tránsito Luis Garay se limitó a graficar la berma, la calzada, el separador, los postes de energía eléctrica, los árboles, el sentido de circulación y la presencia de un hueco en la vía, **pero no se indicó la ubicación de la motocicleta siniestrada, el sitio en donde cayó la víctima Diana Carolina Duque Acosta, la longitud y/o trayectoria de las huellas de frenado ni las dimensiones del hueco, lo cual resulta contradictorio con la hipótesis anotada, pues el gráfico solo muestra un hueco y no varios.***

*En otras palabras, el agente de tránsito Luis Garay **omitió señalar el punto de impacto y la trayectoria -anterior y posterior al volcamiento- del vehículo de placas IGK-82B, lo cual era indispensable para la reconstrucción y el análisis del accidente de tránsito acaecido el 31 de enero de 2009.***

*Incluso, el manual para el diligenciamiento del formato de este tipo de informes puntualiza que, en caso de que el vehículo hubiese sido movido de su posición final, **el agente de tránsito debía diagramar este elemento en forma punteada e indicar en las observaciones el motivo por el cual se había movido del lugar de los hechos, lo cual tampoco ocurrió.***

*Para la Sala es evidente que **el croquis en mención adolece de falencias, porque no consignó todos los detalles relevantes de la escena de los hechos. Incluso, aún con los aspectos que sí se graficaron, la información resulta insuficiente, por ejemplo, aunque el agente de tránsito Luis Garay advirtió de la presencia de un hueco en la vía, en el carril de la izquierda, en sentido sur - norte, lo cierto es que no indicó su profundidad, su ancho y/o su largo, lo que imposibilita a la Sala conocer sus dimensiones y, de esta forma, determinar en qué medida su presencia podía afectar la dirección y/o la velocidad de los vehículos que transitaban por ese sector.***

La única información relevante que contiene el referido informe se encuentra en la casilla correspondiente a “observaciones”, en la cual se indicó lo siguiente: “hipótesis -> huecos en la vía”; no obstante lo anterior, con esta anotación no podría establecerse que lo que resultó determinante en la causación del daño fue la presencia de huecos en la calzada, porque, en primer lugar, en el croquis sólo se graficó un hueco y no varios y, en segundo lugar, no se probó de qué forma esa fisura en la vía afectó el desplazamiento de la motocicleta de placas IGK-82B, pues, se reitera, se desconoce por completo su trayectoria y su ubicación final en la escena de los hechos.

*Adicionalmente, vale la pena precisar que, **si bien en el manual para el diligenciamiento del “informe policial de accidentes” se establece que la autoridad de tránsito debe consignar, al menos, una causa probable del accidente, la hipótesis descrita no corresponde a un juicio de responsabilidad, pues su única finalidad es que el Ministerio de Transporte conozca las causas de accidentalidad y establecer correctivos para reducir el número de accidentes.***

Así las cosas, ante la escasa información suministrada en el plano dibujado por el agente Luis Garay sería necesario acudir a la valoración de otros medios de convicción; sin embargo, no existe en el proceso otro elemento probatorio que permita confrontar el contenido del informe ni verificar cuál fue la causa eficiente del daño por el que aquí se demanda". (Se resalta).

Tratándose de accidentes de tránsito, el competente para realizar el respectivo Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT) es el agente que cumple tal función como se desprende del artículo 148 del Código Nacional de Tránsito que a continuación se transcribe:

"ARTÍCULO 148. FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL. En caso de hechos que puedan constituir infracción penal, las autoridades de tránsito tendrán las atribuciones y deberes de la policía judicial, con arreglo al Código de Procedimiento Penal.

"ARTÍCULO 149. DESCRIPCIÓN. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el agente de tránsito que conozca el hecho levantará un informe descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores, quienes deberán firmarlas y en su defecto, la firmará un testigo.

El informe contendrá por lo menos:

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.

Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.

Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.

Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.

Descripción de los daños y lesiones.

Relación de los medios de prueba aportados por las partes.

Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.

En todo caso en que produzca lesiones personales u homicidio en accidente de tránsito, la autoridad de tránsito deberá enviar a los conductores implicados a la práctica de la prueba de embriaguez, so pena de considerarse falta disciplinaria grave para el funcionario que no dé cumplimiento a esta norma.

El informe o el croquis, o los dos, serán entregados inmediatamente a los interesados y a la autoridad instructora competente en materia penal..."

Al validar el informe diligenciado por el agente de tránsito, específicamente el croquis, vemos que el presente caso se asimila al de la providencia transcrita, dada la ausencia de elementos que eran de obligatorio registro por parte de la autoridad de tránsito, para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del presunto accidente.

Dado lo anterior, es necesario analizar varias de las circunstancias que rodean el supuesto accidente, para lo cual me apoyo en imágenes extraídas de Google maps, con fecha de julio del 2019 y que traigo a continuación:





Las imágenes nos ilustran situaciones de cómo se comporta el tránsito en ese sector. Existe una intersección metros antes del lugar que indica la parte demandante que ocurrió el accidente, es una vía urbana residencial lo que indica que la velocidad no podría exceder los 30 kilómetros por hora, esto aunado que se aproxima a una intersección por el carril izquierdo cuando la motocicleta debe de circular por la derecha.

Conforme lo expuesto en el informe de tránsito, el accidente se presenta en la calzada de la izquierda de la calle 70 con carrera 3 a pocos metros de encontrarse con una

intersección que viene en el mismo sentido de la vía, esto, según las flechas dibujadas que señalan el sentido de la vía en el bosquejo realizado por el Agente de Tránsito. La intersección graficada hace alusión a la que cae a la autopista con los vehículos que llegan o vienen del otro lado de la vía, es decir los vehículos que cambian de sentido sur-norte y caen a la calzada para ir de norte a sur. Ahora si se observa, en esa dirección lo que hay en la franja izquierda es un giro a la izquierda para hacer un retorno, es decir para salir del sentido de la vía e ir a la otra calzada. Este desvío está mucho más allá de la carrera 3 y aun así no es al que se refiere el croquis del accidente, ese queda más adelante. En la carrera 3 a la que se refiere el informe de tránsito, comienza en la esquina donde está el taxi de imagen, de esa esquina hacia adelante es la carrera 2E y el tramo al que intenta referirse el informe es más de 100 metros adelante, donde ya estaríamos en la carrera 2C.

En el informe de tránsito allegado a la demanda, en su parte inferior, a la mitad, se ve la flecha que lleva el mismo sentido de la vía. Esto se contradice con lo que en realidad se aprecia en esa dirección, toda vez que a esa altura de la calle 70 con carrera 3 sobre esa calzada izquierda, lo que en realidad hay es un giro a la izquierda. La intersección que aparece en la gráfica se ubica es al frente de la calle 2C.

En el tramo de vía descrito en la gráfica del informe de tránsito, que es el que recibe los vehículos que vienen del otro sentido de la vía, que llegan, no que salen. En realidad, lo que se debe resaltar es que, a esa altura de la vía, ya no estamos en la carrera 3, inclusive ya se ha pasado por la carrera 2 E. Existe en ese sentido una incongruencia en el informe rendido por el Agente en cuanto al lugar. Ahora en la gráfica se indica que el supuesto hueco está a 9,80 metros del separador, lo que vendría siendo más allá de la mitad de la vía, es decir el carril de la izquierda. También es pertinente indicar que la motocicleta queda a 15,45 metros del hueco, según el dibujo, a la mitad de encontrarse con los vehículos que llegan del otro sentido de la vía.

La distancia que se marca entre donde está el hueco y dónde quedó la motocicleta, es muy amplia, esto sumado a que el vehículo queda sobre el carril izquierdo a la mitad de encuentro con los vehículos que convergen y se suman a la calzada denota es una falta de cuidado, exceso de velocidad e impericia de quien conducía. A esto se suma que sobre el separador izquierdo hay una señal que indica que se aproxima a un punto de detención electrónica a 500 metros del lugar, es decir se debía llevar una velocidad moderada.

En la responsabilidad administrativa por falta o falla del servicio y de conformidad con los parámetros sobre los cuales fue inicialmente estructurada esa teoría, se dan tres elementos constitutivos esenciales, a saber: una falta o falla del servicio que debe ser plenamente acreditada; un daño y una relación de causalidad entre la falla y el daño. La esencialidad de esos tres elementos llega al extremo de que faltando uno de ellos no se configura la responsabilidad administrativa. En nuestro sistema, corresponde al interesado

en la indemnización, probar la falla del servicio, la existencia del daño con todas las características que lo hacen indemnizable y la relación de causalidad.

El problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con base en lo prescrito en el Artículo 90 de la Carta Política, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja responsabilidad a cargo del Estado.

DE LA CARGA DE LA PRUEBA

Según el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”: *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*, y si bien la ley otorga facultad al juez para que decrete pruebas de oficio, ello no puede convertirse en un instrumento que supla las obligaciones correspondientes a las partes en el proceso.

Mediante sentencia del 4 de mayo de 1992, el Consejo de Estado se pronunció al respecto de la carga de la prueba en cabeza del demandante, en los siguientes términos:

“Las afirmaciones o hechos fundamentales y las pruebas aportadas al proceso regular y oportunamente constituyen el único fundamento de la sentencia. En derecho no basta afirmar o relatar unos hechos sin que exista seguidamente la prueba de todos y cada uno de ellos; las pruebas son las herramientas que le permiten al juzgador establecer la verdad y ante la ausencia de ellas, ya sea porque no se emplearon oportunamente y en debida forma los medios que la ciencia y la técnica del derecho ofrecen a las partes, no queda distinto remedio que absolver, dando aplicación al conocido principio onus probandi o carga de la prueba”.

INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO

Acerca de la necesidad de probar la falla del servicio, dentro del régimen del Artículo 90 de la Constitución Nacional, el Consejo de Estado, en reiterada Jurisprudencia, se ha referido a la necesidad de probar la falla del servicio por parte de la Administración. Es así, como en Sentencia de Octubre 6 de 1.995, Consejero Ponente, Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 9535, dijo:

“Comienza por señalar la Sala que el régimen de la responsabilidad presunta derivada del ejercicio de una actividad peligrosa por parte de la administración (Conducción de vehículos), en el cual solamente se requiere demostrar el daño y la relación causa, pudiendo la entidad demandada exonerarse sólo si demuestra la existencia de fuerza mayor o culpa de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero, no es aplicable al caso sub-judice...”

perjuicio de una actividad estatal, en sí misma peligrosa desarrollada para provecho suyo y de la colectividad.

Aquí la responsabilidad que pretende imputarse a la administración no se deriva del ejercicio de una actividad desarrollada mediante un nexo instrumental peligroso. Todo lo contrario: ella se deriva (sic) una omisión de la administración.

Por lo anterior, los hechos objeto del proceso deben manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o probada, en el cual al demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal.

Y, toda vez que se imputa una omisión administrativa, la parte actora debe, además de probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acreditar la existencia de la obligación legal o reglamentaria que imponía a la administración la realización de la conducta con la cual los perjuicios no se habrían producido. O, lo que es lo mismo, debía acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el incumplimiento de un deber y demostrar que dicha falta fue la causante del daño”.

Y, en Sentencia del 5 de Agosto de 1.994, Proceso No. 8487, con ponencia del Consejero Carlos Betancur Jaramillo, se dijo:

“1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa la responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la anti juridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO.

La noción de la falla del servicio no desaparece, como lo ha señalado la Sala, de la responsabilidad estatal fundada en el citado artículo 90 de la Carta, cuando de ella se derive la responsabilidad que se imputa a la administración se constituye en un elemento que debe ser acreditado por el demandante. Así lo ha repetido esta misma Sala.

En otros términos, el daño es antijurídico no solo cuando la administración que lo causa actúa irregularmente, sino cuando esta conducta lesiva esté ajustada al ordenamiento.

En otras palabras, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (la falla del servicio en el lenguaje corriente) tendrá que probarse esa irregularidad, salvedad hecha de los eventos en que esa falla se presume.

En ambas hipótesis ese primer presupuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las reglas de carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño se produjo sin falla o falta de la administración pero el que lo sufre no tenía porqué soportarlo, el acreedor, como es

apenas lógico, deberá demostrar el daño y el porqué pese a ser legal la actuación de la administración, no tenía porqué sufrirlo.

En síntesis, la nueva constitución, a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva no borró del ordenamiento la responsabilidad por falla del servicio. Las nociones de imputabilidad y de daño antijurídico así lo dan a entender” (Sentencia del 25 de febrero de 1.993, ponente, Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 7742)”.

En segundo lugar, estima la Sala que para que en estos casos pueda afirmarse que se presenta la falla del servicio, resulta necesario determinar el alcance de la obligación estatal que se denuncia como incumplida o como cumplida defectuosamente, debiendo orientarse esta determinación hacia la noción relativa de este concepto elaborada por la doctrina y adoptada por la jurisprudencia.

Tal concepto implica, como lo ha dicho repetidamente la Sala, que la responsabilidad de la Administración no puede resultar comprometida cada vez que un particular resulta lesionado en su “vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”, para cuya protección están establecidas las autoridades de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución, pues el examen del cumplimiento adecuado de las obligaciones del Estado no puede hacerse con relación a la que se impone tal obligación, teniendo en cuenta sus recursos, sus capacidades y sus posibilidades y sin que pueda olvidarse que nadie, tampoco el Estado, puede ser obligado a lo imposible”.

Sobre el mismo tema, en ponencia del mismo Consejero, doctor Carlos Betancur Jaramillo, expediente 10327, dijo: *“Por la actividad peligrosa ejercitada tanto por la administración como por los particulares, debe acudirse a la falla probada del servicio según la cual quien debe sacar adelante sus pretensiones está en la obligación de demostrar que el demandado fue el causante del daño”*

De lo anteriormente expuesto se colige que, no se podrá condenar a la entidad pública que represento, al pago de los perjuicios materiales y morales, por sustracción de materia, ya que como se demostrará no hubo participación de sus servidores ni mucho menos falla del servicio, razón por la cual muy respetuosamente solicito no acceder a las pretensiones de la parte demandante.

Es decir, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (falla del servicio) tendrá que probarse esa irregularidad. En ambas hipótesis este primer presupuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las reglas de la carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño produjo una falta o falla de la administración pero que el que lo sufre no tenía por qué soportarlo pese a que sea legal la actuación de la administración no tenía por qué sufrirlo.

Se colige de lo expuesto que definitivamente no es el Distrito Especial de Santiago de Cali el llamado a responder por perjuicio alguno que logre demostrar el actor dentro de este proceso.

Frente a la cuantía, es preciso tener en cuenta que el patrimonio afectado con el hecho dañoso debe recibir como indemnización el monto de su disminución y no un valor exagerado que proviene de la voluntad ilimitada de los actores en la que no existe un razonamiento adecuado de su material probatorio.

En últimas, ni los perjuicios materiales ni los morales alegados tienen fundamento probatorio para lograr su resarcimiento por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali.

INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL

Este elemento resulta de vital importancia para que surja la responsabilidad, el cual debe darse en forma manifiesta y precisa entre el hecho y el daño.

Es aquí donde debemos tener en cuenta la teoría de la causalidad adecuada, la cual sostiene que no todas las condiciones que concurren a un resultado adquieren la categoría de causas que originen la responsabilidad. Hay que separar, escoger, aquellos fenómenos, circunstancias, hechos que realmente fueron determinantes e influyeron en el resultado.

Conforme a lo narrado por la demandante en los hechos de su escrito, si ella como conductora hubiese adoptado una conducta prudente y cumpliendo las normas del Código Nacional del Tránsito, es seguro que no se hubiese presentado el accidente o los daños hubiesen sido menores. La sana lógica nos deja pensar que el lesionado no tuvo el suficiente cuidado y precaución al transitar por la vía el día del accidente, pues el llevar una velocidad adecuada le hubiera permitido evitar riesgos.

La duda sobre una falla del servicio, la duda respecto del accidente, la no certeza respecto del lugar donde indica ocurrió el suceso y aún más la duda sobre si fue esa presunta falla la causante de las lesiones, no permite configurar el nexo causal que se exige para predicar responsabilidad de la Administración Municipal.

De igual manera, se puede inferir que estas violaciones al deber objetivo de cuidado que debe coexistir al momento de ejercer la actitud de conducir motocicleta, son determinantes en el resultado objeto de la indagación, son el nexo causal, así el no conducir con la velocidad permitida impide que en un determinado momento se pueda sortear cualquier situación en el normal tránsito en el uso de la vía, sin que se presente el accidente o que las consecuencias hubiesen sido menores, dado que la naturaleza misma del ejercicio de conducir implica esto, puesto que se está frente a velocidad reacción, por lo tanto, es un acto de falta de cuidado y de incrementar su propio riesgo y por ende superó el riesgo

permitido, lo cual aparejó los resultados mencionados, consecuencia que no se puede trasladar a otras personas o entidades, sino que es de su propia responsabilidad; que si hubiere sido fiel a los cánones que regulan esta actividad, no se hubiera presentado el accidente, consecuente con ello, se concluye que la falta al deber objeto de cuidado se debe pregonar es del conductor de la motocicleta.

CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA COMO CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD

Aun no estando acreditados estos elementos dentro del presente proceso, y en caso de posición en contrario, se alega en este caso una culpa exclusiva de la víctima. La doctrina y la Jurisprudencia nacional, han establecido que una de las causas extrañas como eximente de responsabilidad administrativa ocurre cuando el hecho dañoso le es imputable a la propia víctima, lo cual destruye el nexo causal entre el perjuicio y la acción del presunto ofensor, por lo anterior no se configuran a plenitud los elementos requeridos para que pueda surgir la responsabilidad. En el presente caso la víctima participó de forma activa en la producción del accidente al no conducir su motocicleta con PRUDENCIA, PERICIA Y CUIDADO y no tener las precauciones necesarias al momento de ejercer la actividad de conducción.

La conductora de la motocicleta debía tomar las precauciones necesarias como quiera que se encontraba realizando una “actividad peligrosa”, lo que demandaba conducir con mayor cuidado y a la velocidad permitida, lo que le hubiese posibilitado la observancia de los posibles obstáculos de la vía para superarlos sin dificultad. Es decir, el conductor de la motocicleta con su actuar infringió disposiciones del Código Nacional de Tránsito, evento en el cual se rompe el nexo de causalidad que debe existir entre el daño y la falla para que se configure la responsabilidad de la entidad demandada, pues los hechos deben analizarse en el presente caso bajo el régimen de la falla probada.

Las lesiones en el cuerpo de la señora MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN, sumado al hecho de que no existan pruebas que determinen las circunstancias de tiempo, modo de cómo ocurrió el supuesto accidente, evidencian es una falta de cuidado, negligencia de quien conducía el vehículo, se logra comprender que lo hacía excediendo los límites de velocidad y por una mala maniobra cae al suelo ocasionándose las lesiones por las que intenta responsabilizar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 74 del Código Nacional de Tránsito, establece la obligatoriedad que tienen los conductores de disminuir la velocidad a 30 Kilómetros por hora en el área urbana en los siguientes casos: a. En lugares de concentración de personas y zonas residenciales, b. En las zonas escolares, c. Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad, d. *Cuando las señales de tránsito así lo ordenen*

y e. *En proximidad de una intersección.* Si la conductora de la motocicleta hubiese adoptado una conducta prudente, y cumpliendo las normas del Código Nacional de Tránsito, es seguro que no se hubiese presentado el accidente o los daños hubiesen sido menores. La sana lógica nos deja pensar que la víctima no tuvo el suficiente cuidado y precaución al transitar por la vía el día del accidente, pues llevar una velocidad adecuada le hubiera permitido evitar un riesgo.

Es importante recabar que la demandante actuó con impericia, de haberse dado el accidente en el lugar que indica en los hechos el recorrido vial que llevaba señora MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN, por ello se puede catalogar que su actuar fue imprudente, siendo la única responsable del accidente en que se lesionara, lo cual se infiere que no hubo por parte de la administración, retardo, ineficacia, u omisión en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Sobre la conducta y previsión que le cabe asumir a los conductores de vehículos el Consejo de Estado se pronunció en los siguientes términos:

“Quien conduzca debe prever aún aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico pueda ser evitada con su contribución activa; mas allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor” (Expediente No. 9722, Diciembre 9 de 1996, Consejero Ponente, Juan de Dios Montes Hernández).

En este orden de ideas, carece de sustento lo afirmado por la parte demandante en cuanto señala que el hecho implica una falla del servicio por parte de la administración. Sobre este particular, considero pertinente hacer referencia a los planteamientos esbozados por el tratadista, en su libro EL DAÑO, Universidad Externado de Colombia, primera edición, julio de 1.998, página. 38, cuando afirma:

“Sin embargo, en ocasiones a pesar de existir daño no procede declarar la responsabilidad. Esto por cuanto el daño es requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad. En efecto, en algunos eventos no se declara la responsabilidad, a pesar de haber existido daño.

Es lo que ocurre en dos hipótesis : el daño existe pero no se puede atribuir al demandado, como cuando aparece demostrada una de las causales exonerativas; o el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre”.

Por eso valga repetirlo, se considera que el daño es un elemento indispensable para la existencia de la responsabilidad, pero cuya sola presencia no convierte, de suyo, a quien lo sufre en acreedor de una indemnización.

La causa del siniestro no puede situarse aisladamente por lo que describe la demandante como un hueco que la sorprende en la vía haciéndola perder el control; la conducta de operar o conducir vehículos es integral y comprende los momentos precedentes, de tal manera que los movimientos automáticos que realiza el conductor (acelerar, cambiar las velocidades, disminuir la aceleración o frenar) están dentro de la acción global de conducir, que en su conjunto pueden valorarse como voluntarios, de allí que se pueda inferir si fueran correctos o imprudentes, sin duda a una menor aceleración habría podido sortear con éxito el obstáculo (irresistible e imprevisible para la entidad) evitando así el suceso, imprudencia que en últimas se convierte en la determinante del accidente y sus resultados lesivos.

Debemos recabar que la actividad desarrollada por la demandante ha sido catalogada por la jurisprudencia como de alto riesgo y peligrosa.

Así las cosas, a la Señora MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN le correspondía realizar la actividad de conducción de la motocicleta acatando las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, como es lo dispuesto en el Artículo 55, sobre la obligatoriedad para toda persona que tome parte en el tránsito, como conductor o como peatón, de comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito.

En este caso, el resultado dañoso se produce como resultado de la culpa exclusiva de la víctima que rompe el nexo causal que la actora le endilga a la presunta falla, pues sin lugar a dudas, la causa eficiente del resultado no es más que el actuar imprudente o culposo de esta, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeto como

Igualmente, le correspondía a la señora MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN conducir la motocicleta atendiendo las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, sobre la obligatoriedad para toda persona que tome parte en el tránsito, como conductor o como peatón, de comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito:

*“ARTÍCULO 60. OBLIGATORIEDAD DE TRANSITAR POR LOS CARRILES DEMARCADOS.
Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce. (...)”*

“ARTÍCULO 68. UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES. Los vehículos transitarán de la siguiente forma:

Vía de sentido único de tránsito.

En aquellas vías con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con su velocidad de marcha.

En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento.

Vías de doble sentido de tránsito.

De dos (2) carriles: Por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva.

De tres (3) carriles: Los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su derecha; el carril central sólo se utilizará en el sentido que señale la autoridad competente.

De cuatro (4) carriles: Los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos, y los interiores, para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites establecidos.

PARÁGRAFO 1o. Sin perjuicio de las normas que sobre el particular se establecen en este código, las bicicletas, motocicletas, motociclos, mototriciclos y vehículos de tracción animal e impulsión humana, transitarán de acuerdo con las reglas que en cada caso dicte la autoridad de tránsito competente. En todo caso, estará prohibido transitar por los andenes o aceras, o puentes de uso exclusivo para los peatones.”.

No se puede perder de vista que estamos ante lo que la jurisprudencia denomina una ACTIVIDAD PELIGROSA DE ALTO RIESGO, que demanda a quien la ejecuta, actuar con pericia, prudencia y cuidado. El Código Nacional de Transito establece en su artículo 55 que toda persona que tome parte en el tránsito como conductor debe conocer y cumplir con las normas de tránsito que le sean aplicables:

“ARTÍCULO 55. COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito

El mismo Código, trae unas normas distintivas para quienes conducen motocicletas, así:

ARTÍCULO 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.

Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.

No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario.

No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello.

Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad.

No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.

Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código.

Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte.

La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo.”

“ARTÍCULO 96. NORMAS ESPECÍFICAS PARA MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Las motocicletas se sujetarán a las siguientes normas específicas:

- 1. Deben transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68 del Presente Código.*
- 2. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor.*
- 3. Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces direccionales. De igual forma utilizar, en todo momento, los espejos retrovisores.*
- 4. Todo el tiempo que transiten por las vías de uso público, deberán hacerlo con las luces delanteras y traseras encendidas.*
- 5. El conductor y el acompañante deberán portar siempre en el casco, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, el número de la placa del vehículo en que se transite, con excepción de los pertenecientes a la fuerza pública, que se identificarán con el número interno asignado por la respectiva institución.*

6. No se podrán transportar objetos que disminuyan la visibilidad, que incomoden al conductor o acompañante o que ofrezcan peligro para los demás usuarios de las vías.”.

Al respecto se pronunció el Consejo de Estado en Sentencia del 22 de abril de 2009, expediente 16192:

(...) Asimismo habría que señalar que la conducción de vehículos automotores constituye una actividad peligrosa que involucra a quienes hacen parte de ella, de forma que en aquellos eventos en los que tiene ocurrencia un accidente y, como consecuencia de ello, se causan daños, es necesario verificar la conducta de los partícipes de dicha actividad, en aras de establecer cuál fue la verdadera causa que lo provocó. En todo caso, el juez deberá tomar en consideración la peligrosidad de la actividad, la conducta de las personas implicadas en ella, la incidencia de ambas en el percance o la virtualidad dañina de la una frente a la otra. (...)

Reiteradamente la doctrina y la Jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como del Consejo de Estado, han coincidido en afirmar que tratándose de “*actividades peligrosas*” se presume culpa, entendiendo dentro de éstas la conducción de un vehículo (motocicleta en este caso). A continuación se transcriben apartes de la sentencia de fecha Junio 4 de 1.992 de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente Carlos Esteban Jaramillo Shloss.

“Empero, cuando el daño tiene origen en una actividad susceptible de ser considerada como peligrosa, apoyándose en el Artículo 2356 del Código Civil, la jurisprudencia igualmente ha implantado un régimen conceptual y probatorio cuya misión no es otra que la de favorecer a las víctimas de ciertos accidentes en que el hombre, utilizando en sus propias labores fuerzas de las que no puede tener siempre absoluto control y por lo tanto capaces de romper el equilibrio antes existente, de hecho había colocado a los demás asociados bajo el riesgo inminente de recibir lesión aunque la actividad de la que se trate, caracterizada entonces por su peligrosidad, se llevare a cabo con pericia y observando toda la diligencia que ella exige. Resumiendo las que son sus directrices básicas y los principios que en últimas lo justifican, de aquel régimen especial de responsabilidad y sus alcances tiene dicho la Corte, subrayando repetidamente el claro

*fundamento de equidad que lo inspira dadas las dificultades que por lo común tiene la prueba positiva de la falta imputable al demandado frente a eventos dañosos del tipo de los que se dejan descritos, que sin abandonar el criterio de la responsabilidad subjetiva que campea en el XXXIV, del Libro Cuarto del Código Civil, la doctrina jurisprudencial, al abrigo del artículo 2356 del mismo cuerpo legal, ha deducido...”*que existe una presunción de culpa en quienes se dedican al ejercicio de actividades peligrosas. Considerando, pues, que no es la víctima sino el demandado quien crea inseguridad de los asociados al ejercer una actividad que, aunque lícita, es de las que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de daños, enseño que, en tales circunstancias, se presume la culpa en quien es agente de actividad peligrosa, de tal suerte que demandada indemnización por perjuicio

causado por quien ejerce actividad de ese linaje, a la víctima le basta con demostrar: a) el daño; y b) la relación de causalidad entre éste y el proceder del demandado, pues en tal evento se presume el tercer requisito que es la culpa...”, agregándose en aras de la claridad que...”ésta construcción jurisprudencial no entraña aceptación de la teoría de la culpa objetiva o del riesgo creado, pues de un lado descansa en la existencia de culpa del demandado, aunque ésta sea presunta, y de otro, admite su exculpación demostrando que el daño ocurrió por fuerza mayor, por intervención de un tercero o por culpa exclusiva de la víctima...”

DE LAS PRUEBAS

Las pruebas allegadas al proceso por parte del demandante son insuficientes, no dan certeza respecto a los hechos en que se funda la demanda, las circunstancias de tiempo, modo y lugar no se logran establecer con el material aportado. Dentro de lo acotado el actor se limita a aportar una serie de documentos que dan cuenta de las lesiones que presenta la señora MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN, lesiones por las que fue auxiliada y atendida por el personal médico, quien conoce de las circunstancias del suceso a partir de lo que la víctima les narra.

FACULTAD PARA CONTRAINTERROGAR:

Solicito me sea autorizado contrainterrogar a los testigos de la parte demandante en las audiencias respectivas, para la recepción de testimonios que sean decretados por su Despacho.

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA:

En escrito separado con el fin de que se hagan parte en el presente proceso, me permito formular Llamamiento en Garantía a las Compañías de Seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CHUBB SEGUROS COLOMBIA, SBS y HDI SEGUROS quienes aparecen en la Póliza No. 420-80-994000000054 con una participación cada una del 35%, 30%, 25%, y 10% respectivamente.

ANEXOS:

Los siguientes documentos:

1. Poder a mi conferido por la Jefe de Oficina de la Dirección Jurídica de la Alcaldía.
2. Copia del Acta de Posesión y Decreto de nombramiento de la Jefe de Oficina de la Dirección Jurídica de la Alcaldía.

3. Escrito del Llamamiento en Garantía a la Compañía Seguros CHUBB SEGUROS COLOMBIA, SBS y HDI SEGUROS y sus anexos.
4. Copia de la contestación de la demanda para el traslado del Llamado en Garantía

NOTIFICACIONES

La suscrita las oírán en la Secretaría de su Despacho, en la Secretaría de Infraestructura y de la Alcaldía, localizada en el piso doce (12) del Centro Administrativo CAM, o a través de mi correo juridica3zona@hotmail.com celular 3103878621.

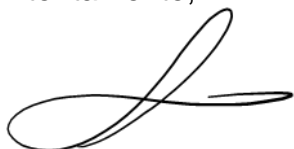
Por instrucciones de la Dirección del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali, las actuaciones dentro del proceso serán remitidas a través del correo oficial ejercicio.defensa01@cali.gov.co

Se informa que el correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme a lo establecido en el art. 197 del CPACA, es notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Las compañías objeto del llamado y su representante legal, las recibirán en las direcciones indicadas en los certificados de existencia y representación expedidos por Cámara y Comercio.

Del Señor Juez Administrativo,

Atentamente,



LINA MARÍA ARBOLEDA GÓMEZ
C.C.N° 1130592302 de Cali-Valle
T.P. N° 191823 del C.S de la Judicatura



JUEZ SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Correo electrónico: adm07call@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: PODER ESPECIAL
Radicación: 2021-00053
Demandante: MARY ANGÉLICA RESTREPO GUZMÁN Y OTROS
Demandado: Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

MARÍA DEL PILAR CANO STERLING, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.869.025 expedida en Cali (V), en mi condición de Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali¹, nombrada mediante decreto No 4112.010.20.0001 del 1 de enero de 2020 y acta de posesión No. 0007 del 1 de enero de 2020, debidamente facultada por el Doctor JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.342.414 expedida en la Cumbre (V), en su condición de Alcalde del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y Representante Legal del mismo, según Decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020² a conferir y/o revocar poderes especiales con las facultades de ley, para la atención de los procesos, lo cual acredito con copia del precitado decreto y de los documentos que certifican tal condición, manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a la Doctora LINA MARIA ARBOLEDA GOMEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 1.130.592.302 abogada titulada con Tarjeta Profesional número 191.823 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, actúe dentro del proceso referido, con la facultad expresa de ejercer todas las acciones en defensa de los intereses del ente territorial.

La apoderada del Distrito Especial de Santiago de Cali, además de las facultades expresamente consagradas en el artículo 77 de la ley 1564 de 2012, queda facultada para contestar la demanda y conciliar conforme a la autorización que otorgue el comité de conciliación de la administración central del Distrito Especial de Santiago de Cali, cuya determinación deberá constar en el acta pertinente y realizar todas las demás acciones inherentes al presente mandato.

Para que se dé estricto cumplimiento al artículo 196³ del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, manifiesto que como parte, la notificación de las providencias que se profieran en el desarrollo del proceso, las recibiré en el correo electrónico notificacionesjudiciales@cali.gov.co, buzón de correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales para el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali a que se refiere el artículo 197⁴ de ese código.

¹ Ley 1933 de 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE CATEGORIZA AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI COMO DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y SERVICIOS

² Decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA DELEGACIÓN EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

³ ARTÍCULO 196. NOTIFICACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS. Las providencias se notificarán a las partes y demás interesados con las formalidades prescritas en este Código y en lo no previsto, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil

⁴ ARTÍCULO 197. ENTREGA ELECTRÓNICA PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES. Las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales. Para los efectos de este Código se atenderán como personales las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico.

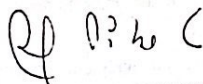
La Doctora LINA MARIA ARBOLEDA GOMEZ con el fin de que ejerza eficazmente el presente mandato como representante judicial, recibirá las notificaciones judiciales en el correo institucional notificacionesjudiciales@cali.gov.co, y en el personal juridica3zona@hotmail.com el cual se encuentra inscrito en la Unidad de Registro Nacional de Abogados.

Sírvase señor Juez aceptar este mandato especial y reconocerle personería suficiente a la Doctora LINA MARIA ARBOLEDA GOMEZ en los términos del presente poder.

ANEXOS

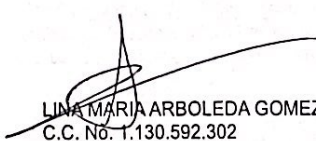
1. Copia de la Cedula de ciudadanía del señor Jorge Iván Ospina.
2. Escritura Pública No. 01 de 2020 de la Notaria Tercera del Círculo de Cali- que protocoliza el acta de posesión del Alcalde de Santiago de Cali.
3. Copia del decreto de nombramiento como Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública , No 4112.010.20.0001 del 1 de enero de 2020.
4. Copia del acta de posesión como Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública No. 0007 del 1 de enero de 2020
5. Copia del Decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020 "Por medio del cual se efectúa una delegación en materia de Representación Judicial, Administrativa y Extrajudicial y se dictan otras disposiciones"

Cordialmente



MARIA DEL PILAR CANO STERLING
Directora del Departamento Administrativo
Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía
Buzón de correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Acepto y solicito se me reconozca personería,



LINA MARIA ARBOLEDA GOMEZ
C.C. No. 1.130.592.302
T.P. No. 191.823 del C.S. de la Judicatura.
Buzón de correo electrónico: juridica3zona@hotmail.com
No. Celular: 310 3878621

Barranquilla DEIP, 11 de septiembre de 2021

Señores

DANE

E.S.M.

Asunto: DERECHO DE PETICION DE INFORMACION

Tema: INSOLVENCIA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE

CRISTIAN WLADIMIR GONZALEZ MUÑOZ, varón, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.129.566.862 expedida en Barranquilla, actuando en nombre propio me permito hacer uso del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, abogado titulado y en ejercicio identificado con la tarjeta profesional No. 174.812 del Consejo Superior de la Judicatura, **DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN:**

1. Cuantas personas naturales no comerciantes domiciliadas en Barranquilla presentaron solicitud de insolvencia persona natural no comerciante para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 ?
2. Cuantas personas naturales no comerciantes domiciliadas en Barranquilla les fue aprobado acuerdo de pago en el proceso de insolvencia persona natural no comerciante para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 ?
3. A que genero pertenecen las personas naturales no comerciantes domiciliadas en Barranquilla que le aprobaron el acuerdo de insolvencia para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 ?
4. En que rango de edad se encuentran las personas naturales no comerciantes domiciliadas en Barranquilla que le aprobaron el acuerdo de insolvencia para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 ?

5. Cuales son las Diez profesiones o actividades laborales de las personas naturales no comerciantes domiciliadas en Barranquilla que le aprobaron el acuerdo de insolvencia para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 ?
- 6.Cuál es el rango en millones de pesos y en salarios mínimos mensuales legales vigentes para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, del valor total de las obligaciones que ocasionan que las personas naturales no comerciantes presenten solicitud para acceder al proceso de insolvencia?
7. Las obligaciones en mora que más han conllevado que las personas naturales no comerciantes soliciten acceder al proceso de insolvencia para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, a que clase de créditos corresponden: de primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta y/o quinta clase?
8. Cuantas personas naturales en Barranquilla, perdieron el empleo para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, cual es el genero, rango de edad, la industria mas afectada, ¿?

NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en el correo electrónico cristiangm2786@gmail.com.

Teléfono de contacto: 3008010300

**CRISTIAN
WLADIMIR
GONZALEZ
MUÑOZ**

Firmado digitalmente
por CRISTIAN WLADIMIR
GONZALEZ MUÑOZ
Fecha: 2021.09.11
09:03:32 -05'00'

CRISTIAN GONZALEZ MUÑOZ
CC 1129566862